

# PRESENTACIÓN

## Presentación

Las gestiones institucionales transparentes y participativas son aquellas que se basan en una cultura de legalidad de las autoridades públicas en el manejo de recursos y toma de decisiones. Para que esta aspiración sea una realidad, deben garantizarse la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de de la ciudadanía.

A pesar del reconocimiento interamericano que tienen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como principios básicos para lograr una cultura de legalidad respetuosa de los derechos humanos, la evidencia indica que la legitimidad del ejercicio del poder se ha visto estancada por los casos de corrupción y abuso. Estos casos se han instaurado como prácticas debido a una ausencia de comprensión sobre la relación entre la falta de transparencia y la violación a los derechos humanos; una persistencia de normas que obstaculizan el acceso a la información pública, y una débil cultura ciudadana para participar y exigir cuentas.

Si bien es cierto que existen nociones de la afectación sobre los derechos humanos que genera la corrupción a través de la omisión y negación del derecho a la información y a la participación; y que se han registrado buenas prácticas ejerciendo mecanismos de control, se observa que existen vacíos importantes en el conocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre los impactos reales que tiene la corrupción en su calidad de vida y, por lo tanto, aún es deficiente la participación generalizada en prácticas de control, vigilancia y auditoría ciudadana, que busque la exigencia y protección de sus derechos humanos.

Haciendo este análisis, la estrategia institucional del IIDH propuso intervenir sobre el derecho al acceso a la información y a la participación ciudadana como requisitos para una gestión transparente y una efectiva rendición de cuentas que prevengan la corrupción, en específico, facilitando la organización de la ciudadanía para que ejerza acciones de control ciudadano.

La publicación que acá se presenta, es la primera iniciativa en este sentido. Específicamente, se trata de una investigación sobre buenas prácticas de auditoría social en América

Latina, que busca funcionar también como una herramienta de la sociedad civil para exigir cuentas, denunciar prácticas de corrupción y controlar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales del Estado en derechos humanos.

El control ciudadano puede ejercerse a través de varias formas, pero en cuanto a la complejidad metodológica y recolección de información, la auditoría ciudadana es probablemente la más amplia y compleja de las figuras de control. Este mecanismo de participación, ha logrado importantes reformas normativas y procedimentales, al detectar irregularidades, realizar denuncias judiciales, aumentar la conciencia ciudadana y la cultura de fiscalización, educar acerca de la gestión pública, y sensibilizar sobre el derecho a la petición de cuentas y al acceso a la información pública.

Con este trabajo se espera ampliar el conocimiento y sensibilización sobre la relación causal entre la corrupción y la violación de derechos humanos, y promover la multiplicación de prácticas de control ciudadano informado con Enfoque Basado en Derechos Humanos, es decir, dirigidas a que sean garantizados los derechos consagrados en los tratados internacionales.

Un particular agradecimiento merecen, por una parte, la organización “Costa Rica Íntegra”, que a través de un convenio con el IIDH, aportó todo su conocimiento y experiencia en la materia para lograr este producto y otros complementarios; por otra parte, la cooperación noruega, que ha hecho posible la presente investigación.

*José Thompson*  
Director Ejecutivo